

naciones. Con ese motivo, solicita al señor presidente y a los señores diputados la aprobación del presente proyecto de declaración.

Catalina Méndez de Medina Lareu.

—A la Comisión de Cultura.

56

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que, en virtud de los antecedentes y documentos obrantes en la Cancillería y otros organismos de su dependencia:

1º— Se declare de interés nacional el puente carretero internacional Itaquí-Alvear considerando la voluntad expresa del gobierno de la provincia de Corrientes de concretar la obra y la decisión conjunta adoptada al respecto por las intendencias municipales de las localidades correntinas de Alvear y La Cruz y la Municipalidad de Itaquí (estado de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil).

2º— Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se activen y/o implementen los trámites diplomáticos y jurídicos pendientes a fin de que el proyecto alcance prontamente vía de ejecución, por su incuestionable incidencia en el fortalecimiento efectivo del proceso de integración que se desarrolla actualmente en el marco del Mercosur y que fue incentivado en la región a partir del protocolo 23, acordado entre las provincias argentinas de Crecenea-Litoral (Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe) y los estados brasileños integrantes del Codesul (Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul y Paraná).

Catalina Méndez de Medina Lareu.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 31 de mayo de 1993 los gobiernos municipales de Alvear y de La Cruz, provincia de Corrientes, y el de Itaquí-estado de Río Grande do Sul, Brasil, todas ciudades fronterizas emplazadas sobre el río Uruguay, se embarcan en un proyecto común y, con la firma de sus intendentes y del prefecto, respectivamente, deciden (sic):

1º— Construir el puente carretero internacional que unirá las ciudades fronterizas de Alvear e Itaquí.

2º— Que tal proyecto deberá emprenderse por administración propia de los municipios partes, mediante la instrumentación de mecanismos idóneos que contemplen la valuación de ofrecimientos de capitales privados que eventualmente se afecten a la financiación.

3º— Constituir oportunamente una empresa binacional, la cual habrá de integrarse, *prima facie*, con aporte de sociedades de ambos países, en porcentajes graduados dentro de las normativas vigentes en relación a la legislación de las empresas binacionales recientemente sancionadas y de aplicación en ambos países, como asimismo fijar los cánones y/o gravámenes, peajes, formas y condiciones de reintegro de las inversiones, de modo de asegurar la rentabilidad de quienes conforman la empresa mencionada.

4º— Unificar por parte de los municipios signatarios sus respectivas legislaciones de modo que la construcción del puente se regle por contrato, acorde al derecho administrativo y/o derecho internacional privado, eximiéndose a los respectivos gobiernos nacionales de responsabilidad legal y/o financiera.

Este documento fue avalado por el gobierno de la provincia de Corrientes el que por decreto 1.079/93 se adhiere a la decisión conjunta mencionada, compromete su apoyo para la eficaz concreción del emprendimiento binacional y lo declara de interés provincial.

Con fecha 24 de enero de 1994, los cancilleres de la Argentina y Brasil intercambian cartas reversales y, prácticamente, fijan un marco para las tratativas por vía diplomática, y dan carácter de acuerdo entre los gobiernos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, por tiempo indefinido, a las notas mencionadas.

La gestión se actualiza en julio de 1997 cuando el intendente de Alvear se dirige por nota al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ingeniero Guido Di Tella, comunicándole el texto de la ordenanza municipal 2/97 aprobada por el Concejo Deliberante, adjuntando la documentación respaldatoria, a fin de que “esa Cancillería, se expida sobre la viabilidad de construcción de la obra puente carretero internacional Alvear-Itaquí, de conformidad al marco ya acordado por las cartas reversales cursadas por las cancillerías de la Argentina y el Brasil, en miras a la concretización de este proyecto por administración y financiamiento propio de los municipios partes”.

En esta comunicación se insiste sobre los antecedentes de la obra, cuyo proyecto deviene aproximadamente del año 1986, fecha en la que ambos municipios fronterizos formaron comisiones encargadas de impulsar la gestión. Y, además, se hace clara referencia a la suscripción del Tratado para la Construcción de Empresas Binacionales Argentino-Brasileñas, el 6 de julio de 1990, ratificado por los Congresos nacionales de los países partes (en la Argentina, ley 23.935), que da el encuadre legal para la implementación de la obra mediante la creación de una empresa binacional.

Según informe de las partes interesadas, faltan completar algunos trámites de carácter diplomático ante el gobierno de la República Federativa del Brasil y, cumplidos éstos, los gobiernos provinciales, estatales y municipales interesados podrán iniciar la vía de ejecución para encarar las etapas previas y, en definitiva, la construcción de la obra.

Su demanda data de muchos años y su necesidad es indiscutible para atanzar el proceso generado por el Tratado de Asunción que constituyó el Mercosur y que es permanentemente sostenido a nivel regional, a partir del protocolo 23 que acordaron los activos grupos provinciales-estadales de Crecenea-Litoral (Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos) y Codesul (Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso do Sul).

Por todo lo expresado, solicito al señor presidente y a la Honorable Cámara de Diputados dar trámite favorable al presente proyecto de resolución.

Catalina Méndez de Medina Lareu.

—A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Intereses Marítimos..., de Transportes y del Mercosur.

57

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar que, previa intervención de los organismos específicos del área, en particular la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), se revea la decisión que hace depender de la Delegación Misiones con sede en la ciudad de Posadas, el Centro Integrado de Frontera (CIF) ubicado en tierra correntina, que funciona en el Complejo Vial Santo Tomé (Corrientes, Argentina) - São Borja (Río Grande do Sul, Brasil) y, en su reemplazo, establezca la dependencia del CIF mencionado con la delegación de la DNM de la ciudad de Corrientes, preservando, de ese modo, el criterio de que los organismos nacionales asentados en Santo Tomé dependen de las jefaturas instaladas dentro del mismo territorio provincial, como ocurre con la Gendarmería Nacional y el juzgado federal.

Catalina Méndez de Medina Lareu.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Cuando en diciembre de 1997 se inauguró el Puente Internacional de la Integración que cruza el río Uruguay y une las ciudades fronterizas de Santo Tomé (Corrientes, Argentina) y São Borja (Río Grande do Sul, Brasil), se concretó una obra clave en el marco del Mercosur para la articulación del corredor vial bioceánico que atraviesa el centrosur de Brasil y norte de la Argentina y Chile, uniendo físicamente los dos países limítrofes en un punto geográfico de importancia, un centro donde confluyen las rutas comerciales de América del Sur y que acerca los polos económicos del Cono Sur con todas las implicancias comerciales, agropecuarias, industriales, de transporte y turísticas que de ello se derivan.

La vinculación vial internacional Santo Tomé-São Borja, más que el puente en sí mismo, constituye un proyecto de envergadura integrado por las siguientes obras:

1. Acceso vial. Margen argentina.
2. Centro de Fronteras y Patio Unificado de Cargas.
3. Puente internacional vial.
4. Acceso vial. Margen brasileña.

En la misma fecha, con el puente, se inauguraron el Centro de Fronteras y el Patio Unificado de Cargas.

Este sector en su totalidad está ubicado en la margen argentina, a 5,5 kilómetros de la ruta nacional 14 y a 2,1 kilómetros de la cabecera del puente.

La superficie, que abarca 90 hectáreas y los 4.000 metros cuadrados destinados exclusivamente al CIF, da idea no sólo de su dimensión, sino del movimiento poblacional que espera atender.

Importa, en consecuencia, coordinar adecuadamente los trámites para que una sobrecargada burocracia no entorpezca la gestión de los que se propongan cruzar el puente internacional.

La Gendarmería Nacional, institución militar de seguridad con organización administrativa descentralizada, tiene dependencia de la agrupación III con asiento en la capital de Corrientes y la intermediación de Paso de los Libres.

No ocurre lo mismo con la Justicia. Al depender el CIF de la Delegación Misiones de la Dirección Nacional de Migraciones, se soslaya la jurisdicción federal con asiento en el Tribunal Federal de Paso de los Libres, que tiene jurisdicción sobre Santo Tomé.

Esta situación burocratiza los trámites, cuando razones de sencillez y coherencia administrativa aconsejan articular la justicia federal y la Gendarmería Nacional, para lo cual es imprescindible derivar los trámites migratorios a la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones sita en la capital de Corrientes, como lo hacen otras localidades de la provincia y del propio departamento de Santo Tomé.

Por todo lo expresado se solicita dar trámite favorable al presente proyecto de resolución.

Catalina Méndez de Medina Lareu.

—A la Comisión de Población y Recursos Humanos.

0425-D-98 (58)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º—Sustitúyense los textos de los artículos 119, 120, 122, 123, 125, 127, 127 bis, 128 y 131 del Código Penal, por los siguientes:

Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años.

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiese resistir.
3. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Artículo 120: Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mayor de catorce años y menor de dieciséis, y no se encontrare en las circunstancias de los incisos 2º y 3º del artículo anterior.

Artículo 122: La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud física o psíquica de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, conviviente, ministro de culto, aunque no estuviere oficialmente reconocido, tutor, guardador o encargado de la educación o del cuidado de aquélla, o con el concurso de dos o más personas.

Artículo 123: Se impondrá reclusión o prisión de ocho a diez años cuando, en el caso del artículo 120, mediare alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 122.

Artículo 125: El que con ánimo de lucro, o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere, consintiere o facilitare la corrupción y/o prostitución de menores de edad, aunque mediare consentimiento de la víctima, será castigado:

1. Con la reclusión o prisión de ocho a quince años, si la víctima fuere menor de catorce años o discapacitada mental.
2. Con reclusión o prisión de seis a diez años, si la víctima es mayor de catorce años y menor de dieciocho años.
3. Con prisión de tres a seis años, si la víctima fuere mayor de dieciocho años y menor de veintinueve años.

Cualquiera fuera la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión, desde diez a quince años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera alguna de las personas enumeradas en el artículo 122 o hiciera con ella vida marital.

En ninguna circunstancia el error o ignorancia sobre la edad verdadera de la víctima podrá ser tomado como atenuante del hecho cometido.

Artículo 127: Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años al que abusare deshonestamente de persona, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122 o si la víctima fuere menor de catorce años, se le aplicará de cuatro a diez años de reclusión o prisión.

Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona o de

un menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de seis a diez años.

La pena se elevará de diez a quince años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el último párrafo del artículo 125.

Igual pena corresponderá a quien, teniendo conocimiento del ingreso o egreso del país de una persona o de un menor con el fin de ejercer la prostitución, consienta su alojamiento o facilite su transporte.

Artículo 128: Será reprimido con prisión de quince días a un año el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes en cualesquiera tipo de soporte u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciera circular.

La pena será de tres a ocho años si en ellas aparecieren menores de edad.

Art. 131: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que cometiere rapto de un menor de dieciséis años y mayor de catorce, aunque mediare su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de cuatro a ocho años si el rapto fuere de un menor de catorce años, con o sin su consentimiento.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María R. Drisaldi.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El marco jurídico que protege a los menores en nuestro país, actualmente tiene punto de arranque en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por nuestro país por la ley 23.849 del 4 de diciembre de 1990, con las observaciones preceptuadas en el artículo 2º de dicha ley.

Dicha Convención, que ha adquirido rango constitucional se continúa en la propia Constitución Nacional Argentina, que al hacer referencia expresa a los Derechos del Niño, se constituye en ejemplo referencial para muchos países, y en la ley 24.417 que hace referencia a la Protección del Maltrato Familiar en la jurisdicción nacional.

No obstante ello y las referencias expresas que el actual Código Penal contiene, los delitos sexuales que tienen por víctimas a menores de edad no se encuentran contemplados en su real dimensión, resultando por lo tanto difícil justificar el por qué un inculpa de delito sexual puede encontrarse en libertad, merced a una red de medidas de orden legal que se confabulan para que ello ocurra, resultando difícil en muchos casos probar la existencia del ilícito cometido.

Es de público conocimiento la circunstancia, triste pero real, de que las estadísticas criminológicas referidas a delitos de orden sexual que tienen como víctimas a menores no resultan ser ni ciertas ni completas, fundamentalmente por el hecho de que no todos los casos son denunciados ni registrados y de que los que se denuncian y se registran en ocasiones resultan difíciles de probar y en consecuencia de arribar a una sanción condenatoria.

No obstante ello, también es de sobra conocido el hecho de que cada día resultan ser más y mayores los ilícitos sexuales perpetrados contra menores de edad de uno u otro sexo.

Si bien la función represora de tales ilícitos, que le compete al Estado, cumple una función intimidatoria, no siempre resulta suficiente para actuar en forma preventiva.

Diversos componentes sociales, culturales, económicos, familiares y laborales, entre otros, dejan entrever falencias que atentan contra los sistemas preventivos y profilácticos que pudieran impedir la consumación de los ilícitos sexuales e general y de los cometidos contra menores en particular.

Subsanar dichas falencias también es una tarea que el Estado nacional, a través de sus distintos organismos, debe darse, y en la realidad se da, en forma paulatina e incansable, pero que, por la urgencia del tema que nos ocupa, no satisface todas las expectativas que, quienes estamos preocupados por el tema tenemos.

Lograr que el Código Penal pueda cumplir también con la función punitiva y con ella, la intimidatoria que secundariamente tiene, puede ser un camino abreviado para coadyuvar a solucionar en parte, las falencias antes mencionadas.

Existen diversos proyectos de ley que han pretendido mejorar esas funciones del texto legal punitivo, aumentando los montos de las penas a aplicar para el caso de delitos sexuales, siendo éste un camino válido para el objetivo a lograr, pero no el único, toda vez que en su contemplación deja de lado una parte importante del ilícito perpetrado: la víctima.

Es por ello que con el presente proyecto se pretende focalizar el problema, y con ello brindar mayor poder punitivo al Código Penal, desde la óptica de la víctima.

Así la nueva redacción del artículo 119 que se propone, suprime del primer párrafo las palabras "de uno u otro sexo", que en su anterior redacción tenía un sentido aclaratorio que resulta innecesario, en el primer inciso se eleva la edad de la víctima de doce a catorce años, pretendiéndose con ello ampliar el espectro de posibles víctimas de violación antes reducido por la edad de doce años.

En el artículo 120, con su nueva redacción, se suprimen las palabras "mujer honesta" vigentes en el actual texto penal, toda vez que se considera una calificación que poco y nada tiene que ver con el ilícito penalizado, dado que éste atenta contra la libertad sexual de la víctima, independientemente de su sexo

y de su honestidad, y fundamentalmente porque "honestas" ha sido una palabra muy viupendiada y subjetivizada, y que en general ha sido usada en contra de la propia víctima y a favor del autor del ilícito.

Asimismo se eleva la edad para la calificación del ilícito de doce a catorce años y el máximo de quince a dieciséis años.

En el artículo 122 se agregan como agravantes las circunstancias de ser convivientes, ministro de culto aunque éste no esté reconocido, tutor, guardador o estar al cuidado de la víctima.

En el estupro agravado, artículo 123, se aumenta el mínimo de la pena pasando de seis a ocho años.

En el artículo 125, promoción y facilitación de la prostitución o corrupción de menores, se suprimen las palabras "sin distinción de sexo", modificándose en el inciso 1º el mínimo de la pena, que pasa de cuatro años a ocho, y la edad de la víctima que de mayor de doce pasa a mayor de catorce, agregándose la discapacidad mental; así como en el 2º también se aumenta el mínimo de la pena de tres años a seis y la edad de la víctima que pasa a ser mayor de catorce años, para finalmente en el inciso 3º el mínimo pasa a ser de tres años para la pena y la edad máxima de la víctima veintinueve años.

En el párrafo final se agregan como agravantes de la figura a los autores enumerados en el artículo 122.

En el artículo 127, se suprimen igualmente las palabras "de uno u otro sexo" agregándose en el segundo párrafo una referencia a la edad de la víctima cuando ésta fuere menor de catorce años, aumentando el mínimo de la pena en un año, quedando de esta manera fijado en cuatro.

El artículo que se refiere a la trata de mujeres y menores, 127 bis, pasa a referirse a la trata de personas, al suprimirse la palabra "mujer" quedando por lo tanto tipificado el ilícito para todos los seres humanos sin distinción de sexo, y se aumenta el monto de la pena que pasa de seis a diez años.

En el artículo 128 se agrega una calificación del ilícito penalizado, cuando en él se hubieren utilizado menores de edad y se amplía el espectro para el caso de la utilización de imágenes.

En el rapto impropio, artículo 131, se modifican las edades de la víctima pasando a ser menor de dieciséis años y mayor de catorce, asimismo se aumenta el monto de la pena de dos a cuatro años si la víctima fuere menor de catorce años.

Es preocupación que nos cabe asegurar el respeto y la dignidad de los menores en el marco de la legislación internacional y constitucional vigente brindando a los juzgadores un marco legal acorde con la realidad.

Por todo lo expuesto, es que se solicita de los señores legisladores, la votación favorable del presente proyecto de ley.

María R. Drisaldi.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.